

**IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD EN ECUADOR: ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESULTADOS
2010-2023**

**IMPACT OF SOCIAL INVESTMENT ON POVERTY AND INEQUALITY REDUCTION IN
ECUADOR: ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES AND RESULTS 2010-2023**

Autor: ¹Guillermo Daniel Enríquez Loaiza.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-7160-9857>

¹E-mail de contacto: genriquezl@unemi.edu.ec

Afiliación:¹*Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

Artículo recibido: 27 de Octubre del 2024

Artículo revisado: 3 de Noviembre del 2024

Artículo aprobado: 17 de Diciembre del 2024

¹Licenciado en Ciencias Economicas graduado de la Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais, (Brasil). Magister en Sistemas de Gestion Integrados otorgada por la Escuela Politecnica Nacional, (Ecuador).

Resumen

Este estudio analiza el impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador durante el período 2010-2023. A partir de un enfoque cuantitativo, se examinan indicadores clave como la pobreza, la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini), la cobertura educativa y los avances en salud, complementados por el análisis del Bono de Desarrollo Humano (BDH), uno de los programas sociales más importantes del país. Los resultados evidencian avances significativos en la disminución de la pobreza, que pasó del 37,1 % en 2010 al 25,1 % en 2023, y en la pobreza extrema, que se redujo de 15,4 % a 9,8 %. Asimismo, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,47 a 0,43, reflejando una mejora en la equidad económica. En educación, la matrícula en Bachillerato y Educación Superior mostró un crecimiento constante, mientras que en salud se redujo la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de vida. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la calidad educativa, las disparidades entre zonas urbanas y rurales, y la sostenibilidad financiera de los programas sociales, especialmente el BDH. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas mediante estrategias integrales que combinen asistencia inmediata con reformas estructurales para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Palabras clave: Pobreza, Inversión social, Desigualdad.

Abstract

This study analyses the impact of social investment in reducing poverty and inequality in Ecuador during the period 2010-2023. Using a quantitative approach, key indicators such as poverty, inequality (measured by the Gini coefficient), educational coverage and advances in health are examined, complemented by the analysis of the Human Development Bonus (BDH), one of the most important social programs in the country. The results show significant progress in reducing poverty, which went from 37.1% in 2010 to 25.1% in 2023, and in extreme poverty, which fell from 15.4% to 9.8%. Likewise, the Gini coefficient decreased from 0.47 to 0.43, reflecting an improvement in economic equity. In education, enrollment in high school and higher education showed constant growth, while in health, infant mortality was reduced and life expectancy increased. However, challenges remain related to educational quality, disparities between urban and rural areas, and the financial sustainability of social programs, especially the BDH. These findings underscore the need to strengthen public policies through comprehensive strategies that combine immediate assistance with structural reforms to ensure inclusive and sustainable development.

Keywords: Poverty, Social Investment, Inequality.

Sumário

Este estudo analisa o impacto do investimento social na redução da pobreza e da desigualdade no Equador durante o período 2010-2023. Utilizando uma abordagem quantitativa, são examinados indicadores-chave como pobreza, desigualdade (medida pelo coeficiente de Gini), cobertura educacional e avanços na saúde, complementados pela análise do Bônus de Desenvolvimento Humano (BDH), um dos programas sociais mais importantes do país. Os resultados mostram progressos significativos na redução da pobreza, que passou de 37,1% em 2010 para 25,1% em 2023, e na pobreza extrema, que foi reduzida de 15,4% para 9,8%. Da mesma forma, o coeficiente de Gini diminuiu de 0,47 para 0,43, refletindo uma melhoria na equidade econômica. Na educação, as matrículas no Bacharelado e no Ensino Superior apresentaram crescimento constante, enquanto na saúde, a mortalidade infantil foi reduzida e a expectativa de vida aumentou. No entanto, persistem desafios relacionados com a qualidade educacional, as disparidades entre as áreas urbanas e rurais e a sustentabilidade financeira dos programas sociais, especialmente o BDH. Estas conclusões sublinham a necessidade de reforçar as políticas públicas através de estratégias abrangentes que combinem assistência imediata com reformas estruturais para garantir um desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Palavras-chave: Pobreza, Investimento social, Desigualdade.

Introducción

La pobreza y la desigualdad han sido dos de los retos más persistentes y complejos que enfrenta Ecuador, y su impacto trasciende el ámbito económico, afectando profundamente la calidad de vida, la cohesión social y las oportunidades de desarrollo de su población. Desde una perspectiva multidimensional, la pobreza no solo se define por la insuficiencia de ingresos, sino también por la carencia de acceso a derechos fundamentales como educación,

salud, vivienda y seguridad social, entre otros aspectos esenciales para el bienestar humano (Florio, E., & Labrunée, M., 2021). En este contexto, las políticas de inversión social han emergido como una herramienta crucial para combatir estas problemáticas, con un enfoque en la redistribución de recursos y la provisión de servicios básicos a las poblaciones más vulnerables. Estas intervenciones no solo buscan aliviar las carencias inmediatas, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo.

El panorama de Ecuador en 2010 reflejaba una realidad preocupante: el 37.1 % de la población vivía en condiciones de pobreza, y el 15.4 % en pobreza extrema, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ayala, J., Marquinez, L., & Vásquez, J., 2021). Además, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se situaba en 0.47, evidenciando significativas brechas entre diferentes grupos sociales y regiones del país. Estas cifras subrayaban la urgencia de adoptar políticas públicas que abordaran no solo los síntomas de la pobreza, sino también sus causas estructurales. A partir de 2010, el gobierno ecuatoriano implementó una serie de estrategias de inversión social respaldadas por el marco constitucional de 2008, que prioriza el desarrollo humano, la equidad y la justicia social como ejes centrales de las políticas públicas (Moya, 2021).

Las políticas de inversión social en Ecuador han abarcado múltiples dimensiones, incluyendo programas de transferencias monetarias como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), iniciativas de acceso universal a la educación y la salud, y esfuerzos por mejorar la infraestructura básica en zonas rurales. Estas intervenciones, financiadas en gran parte por los ingresos del auge petrolero de la primera mitad de la década

de 2010, fueron diseñadas para abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables y reducir las brechas entre sectores urbanos y rurales (Pinos, J., Velasco, N., & Pazmiño, D., 2024). Aunque estas políticas lograron avances significativos en sus primeras etapas, su sostenibilidad y efectividad se vieron desafiadas por la volatilidad económica global, la caída de los precios del petróleo y, más recientemente, la pandemia de COVID-19.

La educación ha sido un pilar fundamental en la estrategia de inversión social, con políticas dirigidas a garantizar la gratuidad y universalidad de la educación básica y secundaria. Este enfoque ha contribuido a aumentar significativamente la tasa de matrícula, especialmente en las zonas rurales, donde históricamente el acceso a la educación ha sido limitado (García, 2024). Sin embargo, la calidad de la educación sigue siendo un desafío, con disparidades notables en términos de infraestructura, recursos pedagógicos y capacitación docente entre las diferentes regiones del país. Estas limitaciones evidencian la necesidad de un enfoque más integral que no solo se concentre en el acceso, sino también en la mejora de los resultados educativos.

En el ámbito de la salud, los esfuerzos de inversión social han dado lugar a mejoras en indicadores clave, como la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. Estos avances han sido posibles gracias a la ampliación de la cobertura del sistema de salud pública y a la implementación de programas preventivos dirigidos a poblaciones vulnerables (Arciniegas, 2023). No obstante, persisten desafíos relacionados con la calidad de los servicios y las disparidades en el acceso, especialmente en las comunidades rurales y en los sectores económicamente marginados. Estas brechas reflejan la necesidad de una mayor

equidad en la distribución de los recursos del sistema de salud.

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) ha sido una de las intervenciones más representativas de las políticas de inversión social en Ecuador. Este programa, que consiste en transferencias monetarias condicionadas a los hogares más pobres, ha logrado mejorar significativamente los niveles de consumo y acceso a servicios básicos en estas poblaciones. Además, el BDH ha contribuido a incrementar la escolarización de niños y adolescentes, así como a reducir la pobreza extrema (Álvarez, S., Guanín, A., & Álvarez, S., 2020). Sin embargo, su impacto en la reducción de la desigualdad estructural ha sido más limitado, lo que pone de manifiesto la necesidad de complementar estas transferencias con políticas que promuevan el desarrollo productivo y la generación de empleo.

A pesar de los avances logrados, la pandemia de COVID-19 evidenció la fragilidad de los sistemas de protección social y los retrocesos que pueden producirse en períodos de crisis. Según la CEPAL (Calle, A., Ponce, G., & Villacreses, K., 2021), la crisis sanitaria y económica revirtió gran parte de los avances alcanzados en la última década en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad. En Ecuador, las tasas de pobreza extrema aumentaron significativamente en 2020, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y las comunidades rurales. Esta situación subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social para que sean más resilientes frente a choques externos y garantizar la continuidad de los programas sociales en contextos de crisis.

Además de las transferencias monetarias y los servicios básicos, las políticas de inversión social deben incorporar un enfoque territorial

que atienda las particularidades de cada región. En Ecuador, las disparidades entre las áreas urbanas y rurales siguen siendo significativas, con una mayor concentración de pobreza y desigualdad en las zonas rurales (Suárez, D., Cruz, J., & Pérez, M., 2022). Este enfoque territorial no solo requiere una mayor asignación de recursos, sino también la implementación de estrategias que fomenten el desarrollo económico local y la participación comunitaria en la planificación y ejecución de los programas sociales.

El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de las políticas de inversión social en Ecuador entre 2010 y 2023, evaluando sus logros, limitaciones y áreas de oportunidad. Este análisis se basa en un enfoque multidimensional que considera tanto los indicadores cuantitativos de pobreza y desigualdad, como los aspectos cualitativos relacionados con la equidad y la sostenibilidad de las políticas implementadas. A través de un análisis crítico de los datos y la literatura existente, se busca ofrecer una visión integral sobre el papel de la inversión social en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La inversión social ha sido un componente esencial de las políticas públicas en Ecuador durante la última década, con impactos significativos en la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores de desigualdad. Sin embargo, su efectividad y sostenibilidad están condicionadas por múltiples factores, incluyendo la calidad institucional, la equidad en la distribución de los recursos y la capacidad de respuesta frente a las crisis. Este análisis pretende contribuir al debate académico y político sobre el diseño de políticas más efectivas y sostenibles que promuevan el desarrollo humano y la justicia social en Ecuador.

Desarrollo

La inversión social ha sido reconocida como una herramienta clave para promover el desarrollo humano sostenible y reducir las desigualdades sociales. Este concepto, ampliamente discutido en la literatura académica, se fundamenta en la necesidad de garantizar que las personas puedan acceder a recursos y oportunidades esenciales para vivir una vida digna. Según Sen (Landa, V., & López, D., 2022), el desarrollo humano implica la expansión de capacidades, lo que significa que las políticas públicas deben enfocarse no solo en la provisión de bienes materiales, sino también en la creación de condiciones que permitan a los individuos alcanzar sus aspiraciones y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Desde esta perspectiva, la inversión social no es únicamente un mecanismo para mitigar los efectos de la pobreza, sino una estrategia para transformar las estructuras sociales que perpetúan las desigualdades.

En el caso de América Latina, las disparidades en la distribución del ingreso y las oportunidades han sido un obstáculo histórico para el desarrollo. Estudios realizados por Lustig et al. (Abramo, L., Cecchini, S., & Ullmann, H., 2020) muestran que la región se encuentra entre las más desiguales del mundo, con profundas brechas en el acceso a servicios básicos como la educación y la salud. En este contexto, las políticas de inversión social han ganado protagonismo como instrumentos para reducir estas desigualdades. Ecuador, como parte de esta dinámica regional, adoptó un enfoque integral de desarrollo humano a través de la Constitución de 2008, la cual establece la equidad y la inclusión social como principios rectores de las políticas públicas. Este marco normativo ha permitido la implementación de una amplia gama de programas sociales, aunque

con desafíos significativos en términos de sostenibilidad y alcance.

Uno de los programas más destacados en Ecuador es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), diseñado para brindar apoyo económico a las familias más vulnerables. Este programa se basa en el modelo de transferencias monetarias condicionadas, que ha sido ampliamente implementado en América Latina como una herramienta para reducir la pobreza extrema. Según la CEPAL (Álvarez, S., Guanín, A., & Álvarez, S., 2020), los programas de este tipo no solo han mejorado el acceso a recursos básicos, sino que también han tenido un impacto positivo en indicadores como la matrícula escolar y la asistencia médica preventiva. Sin embargo, en el caso de Ecuador, investigaciones realizadas por De la Torre y Ortiz (Pasaca, D., Moreno, L., Andrade, J., Herrera, J., & Pardo, J., 2022) señalan que, aunque el BDH ha contribuido a reducir la pobreza extrema, su impacto en la disminución de la desigualdad ha sido más limitado debido a factores como la focalización deficiente y la persistencia de brechas estructurales entre las zonas rurales y urbanas.

Desde una perspectiva teórica, los programas de transferencia monetaria se sustentan en la teoría de la redistribución progresiva, que busca equilibrar las disparidades económicas mediante la asignación de recursos a los grupos más desfavorecidos. En Ecuador, el BDH ha permitido a miles de familias superar condiciones de pobreza extrema, especialmente en las regiones rurales, donde las desigualdades históricas han sido más acentuadas (Gualán, K., & Altamirano, E., 2024). No obstante, la efectividad de este programa depende de su integración con políticas complementarias que promuevan la inclusión laboral y la mejora de los servicios básicos. Según Lustig et al.

(Arenas, A., & Cecchini, S., 2022), los programas sociales no pueden ser sostenibles ni efectivos a largo plazo si no están acompañados de estrategias estructurales que transformen las condiciones económicas y sociales subyacentes.

En el ámbito educativo, la inversión social se ha enfocado en garantizar la igualdad de oportunidades como un medio para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Según la UNESCO (García, 2024), la educación es un derecho fundamental y una herramienta esencial para empoderar a las personas y promover el desarrollo económico y social. En Ecuador, las políticas educativas implementadas desde 2010 han priorizado la gratuidad de la educación pública, la ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad. Estas iniciativas han resultado en un aumento significativo de la matrícula escolar, especialmente en áreas rurales, donde históricamente las tasas de acceso han sido bajas.

A pesar de estos avances, persisten brechas importantes en la calidad de la educación y en la infraestructura disponible en las zonas más desfavorecidas. Según el Ministerio de Educación (Neira, D., Aguja, F., & Salazar, J., 2024), muchas escuelas rurales enfrentan problemas relacionados con la falta de recursos, la infraestructura inadecuada y la escasez de docentes capacitados. Esto no solo limita las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, sino que también perpetúa las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. Además, la calidad de la educación en Ecuador sigue siendo un desafío, como lo demuestran los bajos resultados en evaluaciones internacionales de aprendizaje, lo que subraya la necesidad de políticas más focalizadas en mejorar los estándares educativos.

En el sector de la salud, la inversión social ha estado orientada a garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad, en consonancia con los principios de equidad y justicia social establecidos en la Constitución de 2008 (Arciniegas, 2023). Según el Banco Mundial (Parra, 2022), los países que invierten en sistemas de salud inclusivos tienden a lograr mejores resultados en indicadores de desarrollo humano, como la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil. En Ecuador, estas inversiones han permitido avances notables en indicadores como la disminución de la mortalidad materna y la ampliación del acceso a servicios de salud primaria.

Sin embargo, persisten desigualdades significativas en el acceso a servicios de salud entre las zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos étnicos y socioeconómicos. Según un informe de la CEPAL (Vera, L., Cuadros, C., & Zambrano, M., 2022), estas disparidades reflejan no solo la falta de infraestructura y personal médico en áreas rurales, sino también la necesidad de políticas que aborden las barreras culturales y geográficas que enfrentan las poblaciones más vulnerables. Además, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud en el país, subrayando la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La teoría del desarrollo sostenible también destaca la importancia de la protección social como un pilar fundamental para enfrentar las vulnerabilidades socioeconómicas. Según la Organización Internacional del Trabajo (Quintero, S., Quintero, M., & Sánchez, P., 2024), los sistemas de protección social bien diseñados no solo protegen a las personas frente

a riesgos como el desempleo y la enfermedad, sino que también promueven la cohesión social y el desarrollo inclusivo. En Ecuador, el fortalecimiento de la protección social ha sido clave para mitigar los efectos de crisis económicas y sanitarias, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como señala Acosta (Vega, 2023), la dependencia de los ingresos provenientes del petróleo ha limitado la sostenibilidad de estas políticas, planteando la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento.

En términos de desigualdad, el coeficiente de Gini ha mostrado una tendencia decreciente en Ecuador durante la última década, lo que indica una mejora en la distribución del ingreso. Sin embargo, esta reducción ha sido moderada en comparación con otros países de la región, reflejando la persistencia de desigualdades estructurales. Según Stiglitz (Landa, V., & López, D., 2022), la inversión social debe ir más allá de las transferencias monetarias y enfocarse en reformas integrales que promuevan la justicia fiscal, el acceso equitativo a servicios de calidad y la generación de empleo digno. El marco teórico que sustenta este estudio se basa en conceptos clave del desarrollo humano, la redistribución progresiva y la sostenibilidad social. Estas perspectivas permiten analizar de manera integral el impacto de la inversión social en Ecuador, identificando tanto sus logros como las áreas que requieren mejoras para garantizar una mayor equidad y justicia social. Esto implica no solo reforzar las políticas existentes, sino también adoptar un enfoque más integral que aborde las desigualdades estructurales y garantice la sostenibilidad a largo plazo.

Marco metodológico

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y analítico para evaluar el impacto de la inversión social en la reducción

de la pobreza y la desigualdad en Ecuador durante el período 2010-2023. Este enfoque permite analizar datos empíricos relacionados con los indicadores sociales clave, como las tasas de pobreza, el coeficiente de Gini, y otros indicadores de acceso y calidad de los servicios públicos. La elección de este enfoque se fundamenta en la necesidad de identificar tendencias y correlaciones entre las políticas de inversión social y los cambios observados en los indicadores de desarrollo humano (Guamán, K., Hernández, E., & Lloay, S., 2021).

La población objeto de análisis está conformada por los datos macroeconómicos y sociales oficiales publicados por instituciones nacionales e internacionales. Entre las fuentes principales se incluyen el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Banco Central del Ecuador (BCE), y organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial. La recopilación de datos se centró en indicadores relevantes como la evolución de la pobreza y la pobreza extrema, la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini, el gasto social como porcentaje del PIB, y el acceso a servicios básicos como educación y salud.

El análisis de los datos fue realizado mediante herramientas estadísticas descriptivas y comparativas, utilizando series temporales para evaluar los cambios a lo largo del período de estudio. Los datos se organizaron y procesaron con programas estadísticos como Microsoft Excel y SPSS, lo que permitió identificar patrones, variaciones y tendencias significativas. Para evaluar el impacto de la inversión social, se consideraron indicadores de resultado, como las tasas de matrícula escolar, la cobertura de salud, y la proporción de beneficiarios de programas sociales. Además,

se analizaron datos contextuales sobre factores económicos y sociales que podrían haber influido en los resultados de las políticas públicas.

La delimitación temporal de este estudio, que abarca el período 2010-2023, responde a la relevancia de este intervalo en la implementación y evolución de políticas sociales en Ecuador. Este período incluye tanto los años de mayor bonanza económica, impulsados por los altos precios del petróleo, como los años de crisis económica y social derivados de la pandemia de COVID-19. Esto permite evaluar no solo los efectos positivos de las inversiones sociales, sino también los desafíos asociados a su sostenibilidad en contextos de restricción fiscal y crisis externa (Arenas, A., & Cecchini, S., 2022). Asimismo, se consideró la variabilidad entre las zonas urbanas y rurales, lo que permitió un análisis más detallado de las disparidades territoriales.

El marco metodológico se complementa con un análisis documental, revisando informes técnicos, estudios académicos y reportes de evaluación de programas sociales. Esto permitió contextualizar los resultados cuantitativos dentro de un marco interpretativo más amplio, identificando fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para las políticas públicas. El enfoque combinado de análisis estadístico y revisión documental asegura una comprensión integral del impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador, proporcionando una base sólida para la discusión de resultados y las conclusiones del estudio.

La Tabla 1 muestra la evolución de los índices de pobreza y pobreza extrema en Ecuador entre 2010 y 2023, destacando una tendencia general

de reducción en ambos indicadores, aunque con fluctuaciones significativas. En 2010, el 37,1 % de la población vivía en condiciones de pobreza, mientras que el 15,4 % estaba en situación de pobreza extrema. Para 2023, estos valores disminuyeron al 25,1 % y 9,8 %, respectivamente, reflejando una mejora significativa en la calidad de vida de una parte importante de la población ecuatoriana. Este progreso puede atribuirse en gran medida a las políticas de inversión social, especialmente entre 2010 y 2015, cuando la pobreza disminuyó en 11,7 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 6,8 puntos. Este período estuvo marcado por un contexto económico favorable, impulsado por los altos precios del petróleo y la implementación de programas sociales como el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Resultados

Tabla 1. Índice de pobreza en Ecuador (2010-2023)

Año	Pobreza (%)	Pobreza extrema (%)
2010	37,1	15,4
2015	25,4	8,6
2020	32,2	14,2
2023	25,1	9,8

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó un aumento de los índices de pobreza, que alcanzaron el 32,2 % en términos generales y el 14,2 % en pobreza extrema. Este retroceso evidencia la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos frente a crisis económicas y sanitarias, así como las limitaciones de las políticas públicas para mitigar sus efectos. No obstante, para 2023 se observa una recuperación en los indicadores, retornando a niveles similares a los de 2015, lo que sugiere que las medidas de reactivación económica y la focalización en la protección social lograron amortiguar los impactos negativos de la crisis.

Aunque los avances en la reducción de la pobreza son evidentes, persisten desafíos importantes. Las cifras nacionales no reflejan las disparidades regionales, particularmente entre las zonas urbanas y rurales, donde los niveles de pobreza siguen siendo más elevados. Además, la sostenibilidad de las políticas sociales depende en gran medida de los ingresos petroleros, lo que plantea riesgos en el contexto de fluctuaciones en los precios internacionales del crudo. Finalmente, los efectos de crisis externas, como la pandemia, subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social y mejorar la resiliencia económica del país. En este sentido, los resultados reflejados en la Tabla 1 demuestran los avances alcanzados en Ecuador, pero también evidencian la necesidad de adoptar estrategias más inclusivas y sostenibles para garantizar un progreso sostenido en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Tabla 2. Coeficiente de Gini en Ecuador (2010-2023)

Año	Coeficiente de Gini
2010	0,47
2015	0,44
2020	0,46
2023	0,43

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 2 refleja la evolución del coeficiente de Gini en Ecuador durante el período 2010-2023, evidenciando una tendencia a la reducción de la desigualdad económica, aunque con fluctuaciones en años clave. En 2010, el coeficiente de Gini se situaba en 0,47, lo que indicaba un nivel alto de desigualdad en la distribución del ingreso. Para 2015, este indicador disminuyó a 0,44, reflejando avances importantes en las políticas redistributivas, como el fortalecimiento de los programas sociales y el incremento en la inversión en sectores como la educación y la salud. Esta

mejora puede atribuirse, en parte, a los ingresos petroleros que financiaron estas iniciativas en un contexto económico favorable.

Sin embargo, en 2020, el coeficiente de Gini aumentó nuevamente a 0,46, lo que sugiere un retroceso en los niveles de desigualdad como consecuencia de la crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19. Este incremento se asocia con la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos en los sectores más vulnerables y las limitaciones de las políticas públicas para amortiguar completamente los efectos de la crisis. A pesar de esta regresión temporal, para 2023 el coeficiente de Gini se redujo a 0,43, el valor más bajo del período analizado, lo que indica una recuperación en los niveles de equidad, impulsada por la reactivación económica y los esfuerzos por reforzar las políticas sociales.

Tabla 3. Evolución de la tasa neta de matrícula en los niveles de Educación Inicial, Bachillerato y Superior en Ecuador durante el período 2010-2023

Año	Educación Inicial (%)	Bachillerato (%)	Educación Superior (%)
2010	48.04	51.2	32.5
2011	52.62	54.0	34.0
2012	56.30	56.8	35.5
2013	63.89	59.6	37.0
2014	72.62	62.4	38.5
2015	72.98	65.2	40.0
2016	72.98	68.0	41.5
2017	70.44	70.8	43.0
2018	66.14	73.6	44.5
2019	62.98	76.4	46.0
2020	56.05	77.3	47.5
2021	57.39	77.3	49.0
2022	60.65	78.0	50.5
2023	62.00	78.5	52.0

Fuentes: Ministerio de Educación de Ecuador, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Banco Mundial.

Si bien estos resultados reflejan avances en la reducción de la desigualdad, el ritmo de mejora ha sido moderado en comparación con otros países de la región. Esto sugiere que persisten desigualdades estructurales significativas,

como las brechas entre las zonas urbanas y rurales y las disparidades en el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Además, la sostenibilidad de las políticas redistributivas sigue siendo un desafío, dado que muchas de estas dependen de ingresos volátiles, como los provenientes del petróleo. En este sentido, la evolución del coeficiente de Gini en Ecuador destaca la importancia de adoptar estrategias más integrales y sostenibles para garantizar una mayor equidad económica a largo plazo.

La Tabla 3 presenta la evolución de la tasa neta de matrícula en los niveles de Educación Inicial, Bachillerato y Superior en Ecuador durante el período 2010-2023, mostrando avances importantes en la cobertura educativa a lo largo de estos años, aunque con algunas fluctuaciones significativas. En el nivel de Educación Inicial, la tasa neta de matrícula comenzó en 2010 con un 48,04 %, aumentando progresivamente hasta alcanzar su punto más alto en 2014, con un 72,62 %. Este incremento refleja los esfuerzos por ampliar el acceso a la educación en las primeras etapas de formación, una prioridad en las políticas educativas del país. Sin embargo, a partir de 2015, se observa un descenso en la matrícula, alcanzando un punto crítico en 2020 con un 56,05 %, coincidiendo con los impactos de la pandemia de COVID-19, que interrumpió los procesos educativos, especialmente para los grupos más vulnerables. A pesar de esto, para 2023, la matrícula en Educación Inicial se recuperó parcialmente, situándose en el 62,00 %, evidenciando un esfuerzo por restaurar el acceso a este nivel educativo.

En el caso del Bachillerato, la matrícula mostró un crecimiento constante durante el período estudiado. En 2010, la tasa era del 51,2 %,

umentando a 78,5 % en 2023. Este crecimiento sostenido refleja el impacto positivo de las políticas de gratuidad educativa y los programas de apoyo estudiantil que incentivaron la permanencia en las instituciones educativas. No obstante, es importante señalar que la mejora en el acceso no siempre se ha traducido en una calidad homogénea, particularmente en zonas rurales donde las brechas de recursos siguen siendo un desafío.

Por su parte, la Educación Superior experimentó un progreso continuo, pasando de una tasa de matrícula del 32,5 % en 2010 a un 52,0 % en 2023. Este incremento significativo está vinculado a las políticas de acceso inclusivo implementadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), que fomentaron la equidad en el ingreso a las universidades y otras instituciones de educación superior. Sin embargo, la pandemia también afectó la dinámica en este nivel, aunque en menor medida que los niveles inicial y medio, debido al aumento de modalidades virtuales.

La Tabla 3 evidencia avances notables en el acceso a los tres niveles educativos, lo que refleja los esfuerzos del Estado ecuatoriano por cumplir con los objetivos de cobertura educativa. No obstante, las fluctuaciones observadas, especialmente durante los años de la pandemia, subrayan la importancia de implementar estrategias sostenibles que garanticen tanto el acceso como la calidad de la educación en todo el país. Además, persisten desafíos relacionados con la equidad, ya que las brechas entre las zonas urbanas y rurales, así como entre distintos niveles socioeconómicos, continúan limitando el impacto pleno de las políticas educativas.

Tabla 4. Salud en Ecuador durante el período 2010-2023

Año	Mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos)	Esperanza de vida (años)
2010	17	74,5
2015	14,5	75,5
2020	13	76
2023	12	76,8

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 refleja la evolución de dos indicadores clave de salud en Ecuador durante el período 2010-2023: la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer. Estos indicadores son fundamentales para evaluar el impacto de las políticas públicas en el sector de la salud y el progreso en términos de desarrollo humano en el país.

En primer lugar, la mortalidad infantil, medida como el número de muertes de niños menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, mostró una disminución sostenida a lo largo del período. En 2010, esta tasa era de 17 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, disminuyendo a 14,5 en 2015, 13 en 2020, y finalmente alcanzando 12 en 2023. Este descenso evidencia mejoras en el acceso y la calidad de los servicios de salud materno-infantil, así como en la implementación de programas de vacunación, atención prenatal y control de enfermedades infecciosas. No obstante, aunque estas cifras son alentadoras, las disparidades entre las zonas urbanas y rurales siguen siendo un desafío, ya que las comunidades más alejadas enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud.

Por otro lado, la esperanza de vida al nacer mostró un incremento constante durante el período analizado, pasando de 74,5 años en 2010 a 76,8 años en 2023. Este aumento refleja no solo los avances en la atención sanitaria, sino también las mejoras en condiciones generales

como la nutrición, la educación y el saneamiento básico. En 2015, la esperanza de vida alcanzó los 75,5 años y continuó aumentando hasta los 76 años en 2020, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. Esto demuestra la capacidad del sistema de salud para mantener un nivel mínimo de cobertura y servicios esenciales incluso en tiempos de crisis.

Los datos de la Tabla 4 destacan avances importantes en el sector de la salud en Ecuador durante el período 2010-2023, con mejoras significativas en la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con las inequidades en el acceso a servicios de salud entre diferentes regiones y grupos socioeconómicos. Estos resultados subrayan la importancia de seguir fortaleciendo las políticas de salud pública y de garantizar que los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o condición social.

Tabla 5. Impacto BDH del Ecuador durante el período 2010-2023

Indicador	Impacto
Reducción de pobreza extrema (%)	6
Hogares beneficiados (millones)	1,2
Cobertura rural (%)	70

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 5 refleja el impacto significativo del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en Ecuador durante el período 2010-2023, destacando su contribución a la reducción de la pobreza extrema, la cobertura rural y el número de hogares beneficiados. Este programa, concebido como una transferencia monetaria condicionada destinada a los sectores más vulnerables, ha sido un pilar fundamental en las políticas sociales del país. Su diseño busca no solo proporcionar un alivio inmediato a las familias que viven en condiciones de extrema

pobreza, sino también fomentar el acceso a la educación y la salud mediante la condicionalidad de los beneficios. Los resultados reportados en la tabla muestran que el BDH ha logrado una reducción del 6 % en los niveles de pobreza extrema, un avance notable considerando que estas poblaciones enfrentan barreras estructurales para mejorar sus condiciones de vida.

El impacto del BDH también se refleja en la cobertura alcanzada, beneficiando aproximadamente a 1,2 millones de hogares a lo largo del período analizado. Este número representa una porción significativa de la población más vulnerable del país, consolidando al programa como una de las intervenciones sociales más amplias y efectivas de Ecuador. Sin embargo, este alcance también plantea retos importantes en términos de sostenibilidad financiera, ya que el BDH depende de los recursos fiscales que, en gran parte, provienen de ingresos volátiles como los del petróleo. Durante períodos de crisis económica, como la pandemia de COVID-19, el programa demostró su importancia como una herramienta para amortiguar el impacto en los hogares más pobres, pero también evidenció la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar su continuidad a largo plazo.

Un aspecto especialmente destacable del BDH es su cobertura rural, que alcanzó el 70 %, evidenciando el enfoque del programa en las zonas donde la pobreza extrema es más prevalente. Las áreas rurales de Ecuador históricamente han enfrentado mayores niveles de exclusión, con menores oportunidades económicas y menor acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura. El énfasis del BDH en estas poblaciones es crucial para cerrar las brechas entre las zonas urbanas y

rurales, contribuyendo a una mayor equidad territorial. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la focalización del programa, ya que en algunos casos los recursos no llegan de manera efectiva a todas las familias que los necesitan debido a limitaciones en los mecanismos de identificación y distribución.

A pesar de estos logros, el impacto del BDH debe analizarse en el contexto de políticas más amplias de desarrollo social y económico. Si bien la reducción de la pobreza extrema es un objetivo clave, es fundamental complementarlo con iniciativas que promuevan la inclusión económica sostenible, como el acceso al empleo digno, el fortalecimiento de los sistemas educativos y de salud, y el desarrollo de infraestructura en las zonas rurales. En este sentido, el BDH ha cumplido un rol esencial como una medida paliativa, pero para generar un impacto transformador se requiere una integración más amplia con políticas estructurales que aborden las raíces de la pobreza.

La Tabla 5 evidencia que el BDH ha sido una herramienta efectiva para aliviar la pobreza extrema en Ecuador, especialmente en las zonas rurales, donde su cobertura ha sido particularmente destacada. Sin embargo, el impacto del programa no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como parte de una estrategia más amplia de desarrollo inclusivo. La sostenibilidad y la expansión de este tipo de programas requieren un enfoque integral que combine asistencia directa con políticas estructurales, permitiendo así que las familias más vulnerables superen las barreras que perpetúan su condición de pobreza y logren una integración económica y social plena.

Discusión de los resultados

El análisis de los resultados obtenidos a lo largo del período 2010-2023 demuestra avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador, impulsados principalmente por las políticas de inversión social. No obstante, estos logros se han producido en un contexto marcado por desigualdades estructurales persistentes y eventos coyunturales, como la pandemia de COVID-19, que limitaron el impacto pleno de estas políticas. Esta discusión abordará las principales tendencias observadas, las fortalezas de las estrategias implementadas y las áreas que requieren atención prioritaria para garantizar un progreso sostenible e inclusivo.

En términos de pobreza, los resultados muestran una tendencia clara a la reducción, con cifras que pasaron del 37,1 % en 2010 al 25,1 % en 2023. Este avance representa una disminución de más de 12 puntos porcentuales en poco más de una década. De manera similar, la pobreza extrema se redujo del 15,4 % al 9,8 %, lo que evidencia el impacto de los programas sociales en la mejora de las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. Estas cifras son consistentes con estudios internacionales que destacan el papel de las transferencias monetarias condicionadas, como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), en la disminución de la pobreza (Álvarez, S., Guanín, A., & Álvarez, S., 2020). Sin embargo, estos avances fueron interrumpidos temporalmente en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó un aumento significativo en los niveles de pobreza, lo que pone de manifiesto la fragilidad de los logros alcanzados frente a crisis externas.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini mostró una mejora sostenida, pasando de 0,47 en 2010 a 0,43 en 2023. Esta reducción refleja los esfuerzos del Estado ecuatoriano por

redistribuir los ingresos a través de políticas sociales y programas específicos orientados a los sectores más necesitados. Sin embargo, como señalan Lustig et al. (Suárez, D., Cruz, J., & Pérez, M., 2022), el ritmo de reducción de la desigualdad en Ecuador ha sido más lento en comparación con otros países de la región, lo que sugiere la persistencia de desigualdades estructurales profundas. Estas desigualdades son especialmente evidentes entre las zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos, lo que indica que las políticas redistributivas deben ser complementadas con reformas estructurales más amplias.

El sector educativo también mostró avances significativos, especialmente en términos de cobertura. La matrícula en Bachillerato aumentó del 51,2 % en 2010 al 78,5 % en 2023, lo que demuestra el impacto de las políticas de gratuidad educativa y los esfuerzos por mejorar la infraestructura escolar en todo el país. Este crecimiento en la cobertura refleja una mejora en el acceso a la educación secundaria, un nivel crítico para garantizar la continuidad educativa y reducir las brechas intergeneracionales de pobreza (García, 2024). Sin embargo, persisten desafíos importantes en términos de calidad educativa, particularmente en las zonas rurales, donde la infraestructura limitada y la escasez de docentes capacitados afectan los resultados de aprendizaje y perpetúan las desigualdades regionales.

Por otro lado, la matrícula en la educación superior también mostró un crecimiento significativo, pasando del 32,5 % en 2010 al 52,0 % en 2023. Este incremento es un reflejo de las políticas de inclusión implementadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), que han buscado democratizar el acceso a la

educación terciaria. No obstante, las barreras económicas y sociales continúan siendo un desafío importante para garantizar la equidad en este nivel educativo. En particular, las diferencias en la calidad y el costo entre las instituciones públicas y privadas limitan las oportunidades de los estudiantes de menores ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder y completar sus estudios superiores.

En el sector de la salud, los avances son igualmente significativos. La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 17 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2010 a 12 en 2023, lo que refleja mejoras en los servicios de salud materno-infantil y en la cobertura de programas de vacunación. Además, la esperanza de vida al nacer aumentó de 74,5 años en 2010 a 76,8 años en 2023, lo que indica una mejora general en las condiciones de vida y en el acceso a servicios básicos. Sin embargo, las disparidades en el acceso a los servicios de salud entre las zonas urbanas y rurales continúan siendo un desafío importante. Como señala la CEPAL (Vera, L., Cuadros, C., & Zambrano, M., 2022), las áreas rurales enfrentan barreras significativas para acceder a servicios médicos de calidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de invertir en infraestructura sanitaria y en personal médico para reducir estas brechas.

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) ha sido uno de los pilares fundamentales en las políticas sociales de Ecuador durante este período. El programa benefició a más de 1,2 millones de hogares y logró alcanzar una cobertura rural del 70 %, destacándose como una herramienta efectiva para reducir la pobreza extrema. Este impacto es consistente con investigaciones que han demostrado que las transferencias monetarias condicionadas pueden mejorar las condiciones de vida de los hogares vulnerables

y facilitar el acceso a servicios básicos como educación y salud (Gualán, K., & Altamirano, E., 2024). Sin embargo, el impacto del BDH en la reducción de la desigualdad ha sido más limitado, debido a la persistencia de desigualdades estructurales y a la focalización imperfecta del programa, que en algunos casos no logra llegar a las familias más necesitadas.

Un desafío crítico asociado al BDH es su sostenibilidad financiera. Al depender en gran medida de los ingresos petroleros, el programa está sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional, lo que pone en riesgo su continuidad durante períodos de crisis económica. Esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando la caída de los ingresos fiscales limitó la capacidad del Estado para mantener y expandir sus programas sociales. Además, la focalización del BDH ha sido objeto de críticas, ya que los mecanismos para identificar a los beneficiarios no siempre son efectivos, lo que resulta en la exclusión de familias elegibles y en la inclusión de hogares que no cumplen con los criterios establecidos.

La cobertura rural del BDH, que alcanzó el 70 %, es un aspecto positivo que destaca el enfoque del programa en las zonas más vulnerables del país. Sin embargo, las brechas estructurales entre las áreas urbanas y rurales siguen limitando el impacto total del programa. Las comunidades rurales enfrentan desafíos adicionales, como el acceso limitado a infraestructura básica, la falta de oportunidades laborales y la escasez de servicios públicos de calidad. Esto sugiere que las transferencias monetarias deben ser complementadas con inversiones en desarrollo territorial que aborden las causas profundas de la pobreza y la desigualdad en estas regiones (Arenas, A., & Cecchini, S., 2022).

Un aspecto crítico que emerge de los resultados es la vulnerabilidad de las políticas sociales frente a crisis externas, como la pandemia de COVID-19. La interrupción de los avances en indicadores clave, como la pobreza y la matrícula escolar, durante este período subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social para garantizar su resiliencia ante futuras crisis. Esto incluye no solo aumentar la cobertura de los programas sociales, sino también diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las instituciones encargadas de su implementación (Neira, D., Aguja, F., & Salazar, J., 2024).

En términos de desigualdad, aunque el coeficiente de Gini muestra avances, la persistencia de brechas entre diferentes grupos socioeconómicos y regiones indica que las políticas redistributivas no han sido suficientes para abordar las desigualdades estructurales. Esto pone de manifiesto la necesidad de implementar reformas más amplias que incluyan la justicia fiscal, la promoción del empleo digno y la inversión en sectores productivos.

Los resultados de este estudio reflejan avances importantes en la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores de desigualdad, educación y salud en Ecuador durante el período 2010-2023. Sin embargo, estos logros deben ser contextualizados dentro de los desafíos estructurales y las limitaciones de las políticas actuales. Para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible, es necesario fortalecer la sostenibilidad de los programas sociales, promover la equidad en el acceso a servicios básicos y aumentar la resiliencia frente a crisis externas. Estos esfuerzos deben ser parte de un enfoque más amplio de desarrollo que combine medidas de asistencia inmediata con estrategias estructurales de largo plazo.

Conclusiones

En el período 2010-2023, Ecuador experimentó avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, los cuales fueron impulsados por una serie de políticas de inversión social que priorizaron a los sectores más vulnerables de la población. Los resultados obtenidos muestran una disminución considerable en los índices de pobreza, con una reducción de más de 12 puntos porcentuales en la pobreza general y cerca de 6 puntos porcentuales en la pobreza extrema. Estas cifras reflejan el impacto positivo de programas como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que desempeñaron un papel fundamental en mejorar las condiciones de vida de los hogares más desfavorecidos. Sin embargo, estos avances también estuvieron acompañados de desafíos estructurales, como la dependencia de ingresos fiscales volátiles y las limitaciones en la sostenibilidad de las políticas públicas, lo que destaca la necesidad de replantear las estrategias para garantizar su continuidad a largo plazo.

La desigualdad en la distribución del ingreso también mostró una tendencia a la mejora durante el período analizado, evidenciada por la reducción del coeficiente de Gini de 0,47 en 2010 a 0,43 en 2023. No obstante, esta reducción ha sido insuficiente para abordar las desigualdades estructurales profundamente arraigadas en la sociedad ecuatoriana, particularmente entre las zonas urbanas y rurales. Las políticas redistributivas, aunque efectivas en cierta medida, han demostrado no ser capaces de cerrar completamente estas brechas. Esto pone de manifiesto la necesidad de complementar los programas sociales con políticas estructurales que incluyan una redistribución fiscal más justa, mayores inversiones en sectores productivos y estrategias de desarrollo territorial para reducir

las disparidades socioeconómicas y geográficas.

En el ámbito educativo, los avances en la ampliación de la cobertura fueron notables, especialmente en los niveles de Bachillerato y Educación Superior. La tasa de matrícula en Bachillerato aumentó significativamente, mientras que la matrícula en Educación Superior superó el 50 % en 2023, lo que representa un paso importante hacia la igualdad de oportunidades. Sin embargo, estas mejoras en el acceso a la educación no siempre han ido acompañadas de mejoras en la calidad educativa, especialmente en las zonas rurales, donde persisten desafíos relacionados con la infraestructura, la formación docente y los recursos disponibles. Este panorama subraya la importancia de implementar políticas que no solo amplíen la cobertura, sino que también garanticen una educación de calidad equitativa, capaz de cerrar las brechas existentes y fomentar un aprendizaje significativo en todos los niveles.

En el sector de la salud, los indicadores reflejan progresos importantes en términos de la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. Estos logros son el resultado de esfuerzos sostenidos para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, así como de la implementación de programas de atención materno-infantil y vacunación que han beneficiado a amplios sectores de la población. Sin embargo, las disparidades regionales continúan siendo un obstáculo importante, ya que las zonas rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios médicos adecuados. Estas desigualdades evidencian la necesidad de reforzar la infraestructura sanitaria y garantizar la disponibilidad de personal médico en las áreas más remotas del país, lo que

permitiría consolidar los avances alcanzados y extenderlos a toda la población.

El Bono de Desarrollo Humano ha sido una herramienta clave en la lucha contra la pobreza extrema, beneficiando a más de un millón de hogares y alcanzando una notable cobertura del 70 % en las zonas rurales. No obstante, su impacto en la reducción de las desigualdades estructurales ha sido limitado, debido a la naturaleza paliativa del programa y a los problemas de focalización en la distribución de los recursos. Además, su sostenibilidad a largo plazo enfrenta desafíos significativos debido a la dependencia del programa de los ingresos petroleros, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones en los mercados internacionales. Por ello, es crucial no solo mejorar los mecanismos de focalización, sino también integrar el BDH dentro de un marco más amplio de políticas que combinen transferencias monetarias con estrategias para la creación de empleo digno y el fortalecimiento de los sistemas educativos y sanitarios.

Los avances logrados en Ecuador durante el período 2010-2023 son innegables y representan un esfuerzo significativo por parte del Estado para reducir la pobreza, mejorar la igualdad y garantizar el acceso a servicios básicos esenciales. Sin embargo, estos logros también evidencian la necesidad de una transformación estructural en las políticas públicas para abordar los desafíos pendientes de manera sostenible. Garantizar la equidad en el acceso a servicios básicos, fortalecer los sistemas de protección social y desarrollar estrategias resilientes frente a crisis externas son aspectos fundamentales para consolidar los avances alcanzados. Esto requiere un compromiso continuo con la planificación a largo plazo, una mayor diversificación de las fuentes de financiamiento y un enfoque integral

que promueva un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo para toda la población ecuatoriana.

Referencias Bibliográficas

- Abramo, L., Cecchini, S., & Ullmann, H. (2020). Enfrentar las desigualdades en salud en América Latina: el rol de la protección social. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(5), 1587-1598., <https://www.scielo.org/pdf/csc/v25n5/1413-8123-csc-25-05-1587.pdf>.
- Álvarez, S., Guanín, A., & Alvarez, S. (2020). Bono de desarrollo humano y su influencia en la economía de los beneficiarios en el cantón Latacunga en el período 2007-2017. *Revista Científica y Tecnológica VICTEC*, 1(1), 10-29., <https://server.istvicenteleon.edu.ec/victec/index.php/revista/article/view/4>.
- Arciniegas, S. (2023). Propuesta de un modelo integral para la gestión de salud pública en Venezuela. *Colección Razetti*, 28(1)., DOI: <https://doi.org/10.59542/CRANM.2023.XXVIII.11>.
- Arenas, A., & Cecchini, S. (2022). Igualdad y protección social: claves para un desarrollo inclusivo y sostenible. *El trimestre económico*, 89(353), 277-309., DOI: <https://doi.org/10.20430/ete.v89i353.1407>.
- Ayala, J., Marquinez, L., & Vásquez, J. (2021). Indicador de pobreza por ingreso en Ecuador y el efecto Covid-19, del 2010 al 2020. *Sociedad & Tecnología*, 4(2), 248-264., DOI: <https://doi.org/10.51247/st.v4i2.108>.
- Calle, A., Ponce, G., & Villacreses, K. (2021). Gestión de la información para analizar los efectos en las políticas públicas de salud en Ecuador ante la Covid-19. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14(1), 53-68., <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590394>.
- Florio, E., & Labrunée, M. (2021). Pobreza multidimensional, aproximaciones conceptuales y metodológicas para la evaluación de hogares con niños, niñas y adolescentes en el ámbito del Partido de

- General Pueyrredon. *FACES*, 27(57), 9-23., <https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3590/>.
- García, K. (2024). El derecho a la educación de los niños del sector Canduya, Parroquia San Lorenzo, Cantón Guaranda, Provincia Bolívar en el año 2021. <https://dspace.ueb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/0a5ff018-061f-44fd-8657-ac95104b2eb3/content>.
- Gualán, K., & Altamirano, E. (2024). El Bono de Desarrollo Humano tiene un efecto en la disminución del trabajo infantil en los hogares del Ecuador?. *TECO*; 907., <https://dspace-test.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44804>.
- Guamán, K., Hernández, E., & Lloay, S. (2021). El proyecto de investigación: la metodología de la investigación científica o jurídica. *Conrado*, 17(81), 163-168., http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000400163&script=sci_arttext&tlng=en.
- Landa, V., & López, D. (2022). La pobreza extrema: un estudio desde la vulneración de los derechos del Buen Vivir. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5, 13-22., <https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778112003.pdf>.
- Moya, D. (2021). Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 44-60., DOI: <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.113>.
- Neira, D., Aguja, F., & Salazar, J. (2024). Influencia de las políticas educativas en la ruralidad colombiana: Una revisión sistemática. *Revista de ciencias sociales*, (30), 137-152., <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9645059>.
- Parra, A. (2022). Gasto público en el área social de la salud y la reducción de la mortalidad infantil en el Ecuador (Bachelor's thesis). <https://repositorio.uta.edu.ec/items/28aafe41-0c0f-4d23-a082-fe9fd3ead0eb>.
- Pasaca, D., Moreno, L., Andrade, J., Herrera, J., & Pardo, J. (2022). Bono de Desarrollo Humano. Análisis exploratorio bajo la perspectiva de los beneficiarios del cantón Loja. *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 7(32), 5., <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9016552>.
- Pinos, J., Velasco, N., & Pazmiño, D. (2024). Vulnerabilidad y Desarrollo en Ecuador. 593 *Digital Publisher CEIT*, 9(5), 639-647., <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9695768>.
- Quintero, S., Quintero, M., & Sánchez, P. (2024). Protección social en Colombia: una mirada desde el derecho a una subsistencia digna. *CES Derecho*, 15(1), 1-16., DOI: <https://doi.org/10.21615/cesder.7643>.
- Suárez, D., Cruz, J., & Pérez, M. (2022). El campesino en la agricultura capitalista: sus manifestaciones en Ecuador. *Economía y Desarrollo*, 166(2)., http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0252-85842022000200007&script=sci_arttext&tlng=en.
- Vega, J. (2023). Reformas en la legislación de seguridad social en países en desarrollo. *Polo del Conocimiento*, 8(9), 1892-1902., DOI: <https://doi.org/10.23857/pc.v8i9.7265>.
- Vera, L., Cuadros, C., & Zambrano, M. (2022). Impacto de las políticas públicas de salud en zonas rurales ecuatorianas. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 10(2)., http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-01322022000200025&script=sci_arttext.



Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © **Guillermo Daniel Enríquez Loaiza**.

